

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la situación descrita en la consulta, según la cual una determinada compañía de servicio de taxi elabora un “lista negra” de usuarios “a los que se niega sistemáticamente el servicio de llamada telefónica previa de taxi”. Igualmente se señala que la citada compañía trata los datos de los números telefónicos desde los que se realiza la llamada, denegando el servicio en caso de encontrarse alguno de los mismos en la citada “lista negra”.

Como cuestión previa, en caso de que se proceda a la grabación de los datos correspondientes a los usuarios del servicio, la entidad prestadora del mismo estaría procediendo al tratamiento de datos de carácter personal, debiendo encontrarse dicho tratamiento fundado en alguna de las causas legitimadoras previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 y 10 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

El mencionado artículo 6 señala que no será necesario el consentimiento del afectado cuando los datos “se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”.

En el presente caso, el tratamiento del dato del número telefónico del solicitante y de su dirección, en su caso, se encontrarían amparados en el mencionado precepto, dado que la solicitud del servicio da lugar al nacimiento de una relación jurídica entre el solicitante y la compañía para cuyo desarrollo sería preciso el tratamiento de ese dato.

No obstante, deberán tenerse en consideración dos circunstancias. En primer lugar, el interesado deberá ser informado acerca del tratamiento del dato; en segundo término, dicho tratamiento deberá respetar el principio de conservación, previsto en el artículo 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”.

La aplicación de la primera de las consideraciones implica que, dado que los datos serán recogidos del afectado, la compañía informe al mismo en los términos previstos en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica, según el cual “Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:



- a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
- b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
- c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
- d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”.

La segunda de las cuestiones a las que se ha hecho referencia implicaría, con carácter general, la necesidad de que los datos sean cancelados una vez prestado el servicio o pudiera derivarse alguna consecuencia del mismo, no conservándose dichos datos en el fichero a menos que el interesado hubiera dado su consentimiento para ello.

Lo que acaba de indicarse permite enlazar con la cuestión planteada, por cuanto, como regla general, el dato deberá haber sido cancelado una vez concluido el servicio, por lo que no sería posible su conservación y aún en menor medida su inclusión en una “lista negra”.

Para que ambos tratamientos, que exceden de la relación jurídica en principio nacida de la solicitud efectuada por el afectado, puedan llevarse a cabo será precisa la propia intervención del interesado, no bastando la conservación ni la utilización posterior del dato sin dicha intervención.

De este modo, si el interesado hubiera sido informado de la posibilidad de que la compañía prosiga en el tratamiento del dato para poder prestarle un mejor servicio en posteriores solicitudes, conservando los datos que se indicasen en la información facilitada, y el interesado accediese al mantenimiento de dicha relación continuada, sí sería posible la conservación.

Del mismo modo, si se indicase, en caso de permanecerse en el tratamiento que las condiciones para la prestación del servicio exigen que el interesado en caso de rechazar aquél informe a la compañía de esta circunstancia, quedando informado expresamente de que en caso de no cumplirse esas condiciones será posible la denegación del servicio en posteriores ocasiones, también podría considerarse amparado el tratamiento en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, al que ya se ha hecho referencia, no existiendo contravención alguna de la Ley en caso de persistirse en el tratamiento.

De los términos de la consulta no se desprende cuál es la situación real concurrente en este caso, por lo que no puede indicarse terminantemente que se esté produciendo una vulneración de la Ley Orgánica 15/1999.



No obstante, en caso de que el tratamiento no se estuviera llevando a cabo conforme a lo dispuesto en el presente informe, la consultante podrá denunciar los hechos ante esta Agencia Española de Protección de Datos, a fin de que por la misma se inicien las actuaciones de inspección y, en su caso, sancionadoras, si las mismas procedieran en derecho.